

La desigualdad marca nuestra historia
Rolando Cordera Campos
Profesor Titular “C” Tiempo Completo
Centro de Estudios Globales y de Alternativas para el
Desarrollo de México
Facultad de Economía, UNAM
(Con la colaboración de Alberto Castro, Facultad de Economía,
UNAM).

La desigualdad marca nuestra historia y cruza nuestras mentalidades. Desde que el Barón de Humboldt nos describió como la tierra de la desigualdad, las generaciones que han gobernado y dominado la sociedad mexicana parecen haberse empeñado en rendir puntual homenaje a tan lamentable calificación.

Sin embargo, a lo largo de la historia de la formación mexicana puede encontrarse también la materia prima para un discurso sobre la desigualdad, aunque sus consecuencias políticas puedan en cada caso ser disímbolas cuando no contradictorias.

Recurrir a este discurso, que va de Morelos a Ponciano Arriaga e Ignacio Ramírez, pasa por Andrés Molina Enríquez y es recogido a su modo por Mariano Azuela (Los de abajo) y Federico Gamboa (La venganza de la gleba), puede inspirar el empeño de tejer una convocatoria que actualice la conciencia mexicana y coadyuve a que la sociedad del nuevo siglo se redescubra en el reconocimiento preciso de su desigualdad profunda. Este “redescubrimiento” de México sería el primer paso para darle a sus transformaciones estructurales de los últimos lustros un sentido histórico progresista, congruente con el discurso que se forjó al calor de la construcción del Estado nacional y del impulso de la Revolución Mexicana y que con la democratización de fin de siglo parece haberse desvanecido de la nueva agenda abierta por la globalización del país y su consecuente apertura política hacia la pluralidad.

El descubrimiento de la desigualdad suele estar asociado al que se hace de la pobreza que acorrala a las masas. No siempre de manera expresa, pero esta asociación aparece una y otra vez en el pensamiento social mexicano sea para engarzar una crítica del estado de cosas existente, sea para alertar a los que mandan sobre la presencia ominosa de los “bárbaros” en la puerta de palacio.

En la literatura ha sólido vincularse la desigualdad con el rencor social, al que se le ve como su expresión unívoca, lineal, prácticamente única. Más que como un cáncer social que carcome las potencialidades nacionales y determina sus limitaciones más recias, a la desigualdad se le entiende como la fuente del estallido de la gleba y el rencor es convertido en su lenguaje único. En la medida en que la desigualdad se resuelve en rencor o indignación, se reduce al estallido puntual, a la catarsis o el escenario ominoso, y ello limita al máximo las posibilidades de traducirla en fórmulas políticas y diseños institucionales dirigidos a disolver sus núcleos primordiales, alojados en el privilegio del poder o la riqueza concentrada.

Al no inscribir la desigualdad en el escenario de la política y el desarrollo, se le convierte en costumbre cuando no en cultura. Más que de una cultura de la pobreza, habría entonces que hablar de una cultura de la riqueza, de un regodeo con la satisfacción que al operar como matriz cultural involucra a capas sociales que no disfrutaban de la misma, o que lo hacen virtual o periféricamente. Como ha escrito recientemente David Ibarra: “Las asimetrías en el reparto del ingreso y la pobreza se han convertido en una constante de la vida nacional, apenas atenuada en los periodos de prosperidad... tales fenómenos son resultado de las características del sistema social del país, de sus instituciones y de la naturaleza de las políticas públicas. Ello confirma, por otro lado, el que las instituciones de países igualitarios tienden a reproducir la equidad, mientras que ahí donde prevalecen desigualdades acusadas se tiende a perpetuarlas. La obscura historia distributiva de América Latina comparada con la luminosa de los países escandinavos parecería validar el aserto anterior” (“Crecimiento y distribución”, El Universal, 19/09/05, p. A 46).

Luego de pasar revista rápida a las expresiones más conspicuas de la desigualdad socioeconómica del presente, este ensayo busca encarar el desafío de la desigualdad como un reto a la cultura posible que debía acompañar ya al cambio democrático alcanzado por México a fines del siglo XX. Para muchos, incluido el autor de este ensayo, la desigualdad, al combinarse con la pobreza urbana, se ha vuelto ya un desafío mayúsculo a la continuidad y la reproducción ampliada de la forma de desarrollo implantada en el país al calor del vuelco globalizador del mundo que arrancó en los años setenta del siglo XX y adquirió velocidad de vértigo con el fin del régimen bipolar a partir de 1989.

Cambio y permanencia: cambio económico, democratización y desigualdad.

A través de mutaciones estructurales diversas tuvo lugar en México una serie de importantes reformas de su Estado, así como refundaciones y adecuaciones institucionales enormes y costosas, que han cambiado la faz de México y las relaciones de poder que le dan sentido al propio Estado. Sin embargo, la desigualdad sigue instalada en la base de la economía y las relaciones sociales, condiciona el gobierno cotidiano de las cosas públicas y modula lo que en el largo plazo es lo más importante: la cultura nacional y los reflejos colectivos que determinan la conducta social.

Esta desigualdad es profunda y arraigada, y no respeta las migraciones poblacionales, de recursos, de capital y de riqueza que sin duda han caracterizado la geografía humana de México en sus dos siglos de existencia y que adoptaron velocidad de cruce en estos últimos tiempos de cambio.

La desigualdad se despliega de la riqueza al ingreso, a la educación, la salud y el género, y seguramente define también asimetrías grotescas en la forma de disfrutar la vida y morir. De aquí su carácter matricial y la necesidad de entenderla como un fenómeno multivariado que no puede reducirse a sus fuentes y variables económicas. Se aloja en los pliegues del carácter social y

tiende a presentárenos no tanto como una maldición sino como parte misma de nuestra naturaleza.

Lo anterior no debe verse, sin embargo, como una fatalidad inmutable. Sin registrar grandes transformaciones, la inequidad distributiva parece haber atravesado por ciclos de relajamiento en la fase larga de crecimiento alto y sostenido que resultó de la industrialización dirigida por el Estado entre 1940 y 1980. A partir de los inicios de la tercera década de este periodo, el país confirmó su urbanización y dio lugar a la emergencia de las nuevas capas medias, así como a evoluciones y revisiones culturales significativas que en buena medida “hicieron época”. México registró también la emergencia del reclamo democrático inicial protagonizado por los estudiantes y profesores universitarios en 1968. Sin conmoverse de fondo, la desigualdad se deslizó y parecía posible que sus parámetros más arraigados fueran si no disueltos sí dinamizados por el crecimiento y la modernización económica y social.

Según reportan Enrique Hernández Laos y Jorge Velázquez Roa, tanto la participación de los salarios en el ingreso, como la de los sectores bajos y medios de la pirámide social, tuvieron ascensos a lo largo de esta fase, aunque luego sufrieron reversiones agudas y recuperaciones insuficientes.

Siguiendo a estos investigadores, la participación de los salarios en el ingreso del sector no agropecuario habría evolucionado de la siguiente manera:

Participación de Asalariados en el Producto No Agropecuario

Periodo	Remuneración de Asalariados en el Producto del Sector No Agropecuario ¹
1951 ²	29.0%
1976 ²	44.0%
1987 ²	29.9%
1988	33.4%
1989	33.3%
1990	33.7%
1991	35.2%
1992	37.3%
1993	39.1%
1994	39.7%
1995	35.0%
1996	32.9%
1997	33.8%
1998	34.5%
1999	35.0%
2000	35.2%
2001	36.6%
2002	36.2%
2003	35.6%

¹ Cálculo a partir del Producto Interno Neto No Agropecuario, a precios corrientes

² Cifras tomadas de Hernandez Laos, P. 162, Cuadro 2. Su cálculo está basado en la Remuneración de Asalariados en el PIB, a precios corrientes

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México; Enrique Hernández Laos, "Políticas de Estabilización y ajuste y distribución funcional del Ingreso en México", Comercio exterior, Vol. 50, No. 10, México, Octubre 2000.

La participación de los salarios habría alcanzado su punto máximo en 1976, para luego ver revertida esta tendencia durante una década hasta 1987 cuando presenta su valor mínimo. Esto refleja una redistribución negativa atribuible al proceso de ajuste, que luego se recupera debido al proceso de apertura y el inicio de la baja inflacionaria, aparte de que empieza a darse una relativa recuperación del crecimiento (Hernández Laos, 2003, pp. 70 - 79). Las oscilaciones en contra de la inequidad contrastan con la duración de la concentración pero sobre todo con las enormes distancias no sólo entre la cúspide y la base la pirámide, sino entre la primera y los deciles que de manera inmediata están por debajo de ella. En todos los años, la participación del decíl mas rico casi triplica la participación del segundo, salvo en 1984 cuando se registra en términos distributivos la cumbre del crecimiento industrial protegido y dirigido por el Estado. Una anotación similar puede hacerse con lo que ha ocurrido al resto de las capas sociales intermedias (Ver cuadro 2).

La distribución del ingreso, medida por deciles, muestra que la participación en el ingreso de la suma de los deciles VI a VIII en 1968, fue inferior a la mitad de la participación en el ingreso del diez por ciento mas rico de la población. Esta situación se modificó a partir de entonces pero no al grado de modificar significativamente la concentración en la cúpula. En el periodo que se comenta,

la participación sumada de los deciles mencionados (VI-VIII), oscila alrededor del 60% de la porción del decil más rico, exceptuando 1984, cuando representa más del 80%. Esto puede en realidad reflejar una caída mayor en la participación en el ingreso de los más ricos durante la crisis, debida al hecho de que muchos de quienes forman parte de esta categoría reciben la mayor parte de sus ingresos de sus empleos, muchos de ellos del sector público, que estaba sometido en esos momentos a una profunda crisis fiscal. Una vez iniciada la recuperación, las tendencias concentradoras regresan, mostrando el carácter estructural de la desigualdad y, en el mejor de los casos, el carácter coyuntural de las redistribuciones (Cortés, 2000)

Cuadro 2. Participación porcentual del ingreso monetario de los hogares, según deciles de hogares ordenados por su ingreso monetario per cápita, número medio de perceptores por hogar, e índice de Gini

Años	I		II - V *		VI - VIII *		IX		X		Escolaridad Media	No. de perceptores promedio	Gini
	Ingreso (%)	Escolaridad											
1968	0.9	-	11.9	-	22.7	-	16.8	-	48.3	-	-	-	-
1977	1.0	-	14.1	-	26.7	-	17.1	-	41.2	-	-	1.5	0.526
1984	1.4	3.0	16.5	4.3	28.5	6.1	16.8	6.7	36.8	9.0	5.6	1.6	0.477
1989	1.1	3.6	15.5	5.4	26.2	7.3	15.6	8.6	41.6	9.2	6.7	1.7	0.518
1992	1.0	2.8	14.3	4.8	25.2	7.1	15.9	9.2	43.6	12.0	6.9	1.7	0.532
1994	1.0	3.5	13.9	5.4	24.7	7.7	15.6	8.7	44.7	10.2	6.9	1.7	0.538
1996	1.1	3.2	14.8	5.6	25.6	7.8	15.6	10.2	42.8	12.4	7.5	1.8	0.521
1998	0.9	4.1	14.2	5.9	25.6	8.1	16.0	9.3	43.3	11.6	7.6	1.8	0.534
2000	1.1	3.2	14.5	5.9	25.7	8.5	15.9	10.4	42.7	13.2	8.1	1.9	0.523
2002	1.3	3.5	15.7	5.9	26.4	8.3	16.1	10.5	40.5	13.3	8.1	2.0	0.500
2004	1.2	3.6	16.3	6.2	26.6	8.8	15.9	11.1	39.9	13.8	8.4	2.0	0.492

* Muestra la suma de las participaciones de los deciles indicados, y el promedio simple de escolaridad de los mismos

Fuente: Cortés, Fernando; y Secretaría de Educación Pública con base en información del INEGI.

www.sep.gob.mx/sep/sep_Estadísticas

No sólo es la concentración lo que perturba el panorama social mexicano en el último tercio del siglo pasado y lo que llevamos de este, sino también unas distancias que no están más ocultas por el peso y la lejanía de la sociedad rural. La desigualdad se desvela en amplias brechas entre el mundo rural y urbano, incluso entre municipios colindantes, donde los beneficios del desarrollo se viven en el más urbanizado, que atrae los recursos y capacidades de los colindantes (ver Anexo I). Por otro lado, el empleo precario, ha tomado cada vez mayor importancia en nuestro país; casi la mitad de la población y la mayor parte de las empresas forman parte de un gran parque de micros y pequeños negocios distribuidos a lo largo y ancho del país, que no representan más de la cuarta parte de los ingresos generados al interior del territorio (Ver Anexo III). Desigualdad, brechas distributivas y pobreza, toman cuerpo y vida en las urbes de México y ahora también en la democracia que convoca y promete la igualdad de todos en las urnas, la ley y el bienestar. La desigualdad imperante se percibe en el sentir de la población que registra un cúmulo de expectativas no consumadas y expresa de varias maneras su decepción con la democracia misma.

Este sentir lo revela la encuesta de percepción de la desigualdad y de la inequidad en la impartición de la justicia que se muestra en el Anexo II. Ahí, se registra que la mayoría de los grupos marginados mexicanos son percibidos como desprotegidos y en situación de injusticia en un grado mayor que en muchos otros países latinoamericanos.

Por todo esto es que puede decirse hoy que la desigualdad es un desafío global y conforma una paradoja cruel. Los grandes movimientos de la base social del país, como la Independencia y la Revolución, junto con los discursos estelares de sus elites, se han tejido en torno a la cuestión de la desigualdad. Más que la pobreza de masas, que registra también ciclos significativos a lo largo de los doscientos años de vida independiente, es la desigualdad en la distribución de la riqueza y el ingreso, junto con sus derivados y correlatos en materia cultural, educativa, de acceso a las oportunidades y de trato por y ante la justicia, la que marca la pauta de los sentimientos nacionales y da lugar en diversas coyunturas históricas al discurso dominante de la política y del poder. Pero su larga y férrea duración la hace a la vez la paradoja mayor de nuestra historia.

Al cabo de casi un siglo de desenvolvimiento económico impetuoso, que reflejó y a la vez propició grandes mutaciones en la demografía, la estructura de clases y la misma organización del poder político y de la dirección del Estado, México asiste a un presente democrático acompañado de un estancamiento económico estabilizador (o estabilizado), que pone en cuestión la sustancia del discurso democrático al hacer evidente su frágil basamento de igualdad ante la ley y las urnas. La concentración de oportunidades, accesos y recursos de que dan cuenta las estadísticas recientes, constituyen argumentos *prima facie* contra la oferta básica de igualdad de que es portadora toda democracia y abre la puerta a reclamos desde la democracia que ponen en entredicho las bases mismas del Estado cuando estas son leídas, como ocurre en el presente, sólo en código liberal.

Como en el siglo XIX en boca de algunos de los liberales sociales que criticaban el credo liberal importado de Estados Unidos o Europa, hoy adquiere actualidad creciente y una legitimidad indiscutible el postulado de que no puede tratarse igual a los desiguales, sobre todo cuando esta desigualdad cruza y domina los entramados básicos de la organización colectiva, la vida social, la impartición de la justicia y de la producción y la distribución de los bienes culturales. Y es en este discurso en formación que puede encontrarse la respuesta robusta de la democracia al desafío de la desigualdad.

Insistamos. La tendencia de la escolaridad media por deciles de ingreso, refleja una clara desigualdad de oportunidades. Así, mientras que en el primer decil la escolaridad media durante 20 años aumentó mínimamente (de 3 a 3.6 años promedio de escolaridad), los deciles intermedios muestran un incremento que oscila entre el 30 y el 50% de años promedio de estudio más que en la primera observación. En suma, mientras que el decil más rico aumentó su escolaridad de 9 a 13.8 años entre 1984 y 2004, y el decil noveno lo hizo de 6.7 a 11.1 años, el diez por ciento más pobre prácticamente se quedó igual. (ver Cuadro 2).

Respecto a la salud y la nutrición, las cifras de la población infantil reflejan la misma problemática. No obstante la tasa de mortalidad infantil es alta, y

cercana a la media en el decíl más alto de ingresos, este indicador virtualmente se duplica en el 10% de población de menor Ingreso. En cuanto a la morbilidad, la brecha es amplia y evidente: el porcentaje de incidencia de la morbilidad infantil en los deciles II a IV está cerca de duplicar el indicador en la mayoría de los deciles siguientes; el primer decíl del ingreso (el más pobre), triplica al de mayor ingreso. La distribución de la enfermedad entre los niños por niveles de ingreso confirma estas observaciones. (ver Cuadro 3).

La desigualdad entre los estados de la república también refleja la diferencia de capacidades, de nivel de desarrollo humano y de aprovechamiento de las oportunidades del comercio y la apertura, de acuerdo a sus capacidades, en particular la educación y la salud. Los casos de Guanajuato, Hidalgo y Oaxaca, muestran un lento incremento de la escolaridad promedio, y los porcentajes de morbilidad infantil más altos del país. Estos estados tienen también los índices de desarrollo humano más bajos que la media nacional. (Ver Anexo 4).

Cuadro 3. Incidencia y distribución de desnutrición y mortalidad infantil (%)

Deciles		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Media	Coefficiente de concentración		
*															
Baja Talla (0-5 años)**	ENNVH	Incidencia	27.0	18.5	18.1	15.2	9.7	8.5	10.2	7.9	7.7	9.9	14.2	-0.3254	
		Distribución	23.5	16.3	14.4	12.5	7.4	6.1	6.1	5.1	4.4	4.0			
	ENN	Incidencia	39.1	33.7	27.0	27.6	17.8	19.9	12.9	9.2	5.8	5.3	17.7		-0.3871
		Distribución	23.8	17.9	13.3	13.1	11.7	7.7	5.1	3.8	2.4	1.3			
Tasa de Mortalidad Infantil	Incidencia	38.0	31.1	27.0	23.8	22.9	21.3	20.5	20.8	20.4	19.7	24.5	-0.2078		
	Distribución	21.3	14.2	11.2	8.8	8.7	7.6	7.6	7.1	7.3	6.3				

*ENNVH : Deciles poblacionales ordenados por gasto per cápita

ENN: deciles de hogares ordenados por ingreso per cápita, imputado por medio de la ENIGH 2000

TM I: Deciles poblacionales ordenados por nivel de marginación (índice Conapo)

Fuente: Macroeconomía y Salud, Informe de la comisión mexicana sobre macroeconomía y Salud. Marzo, 2005; p.41

Los datos y su persistencia son contundentes. Lo que sobresale por su labilidad, por su notable capacidad para eludir la cuestión central que esos datos recogen, es la sabiduría convencional disfrazada de modernidad y ahora de globalismo. Todo parece encontrar espacio en este discurso, incluso la admisión de cuotas impresentables de pobreza y empobrecimiento que hay que “combatir” con las mejores prácticas y la máxima cautela para “no politizarla”. Lo que no encuentra hueco es el reconocimiento explícito de la vinculación que hoy existe entre esta pobreza masiva y la original concentración de activos, ingreso y posiciones de poder, que como hemos visto se las ha arreglado para reproducirse en el tiempo largo de la nación mexicana. Sin vincular estas dos variables fundamentales de la actualidad pública y privada de los mexicanos que quieren vivir la democracia y la globalización como modernos, se corre el riesgo nada lejano de repetir la suerte mala de las otras modernizaciones truncas intentadas en el pasado, sustentadas en un orden político y un régimen económico incompatibles con el verbo y el credo democráticos. Estos, para ser efectivamente modernos, tienen que contemplar

de modo expreso el compromiso del Estado y de la economía con el bienestar generalizado y equitativo de su población. Así ocurrió con la gran modernización porfirista, que luego se desplomó como gigante oligárquico con pies de barro. Así puede ocurrir hoy, cuando las elites buscan desentenderse de la desigualdad esencial que las rodea y apuestan a unos procesos económicos despojados de casi toda relación con las estructuras sociales de las que parten y a las que irremisiblemente afectan mediante dislocaciones productivas y distributivas y disonancias culturales y mentales del más diverso tipo.

Por mucho tiempo, el crecimiento económico permitió posponer en algún grado el encuentro de la sociedad con sus núcleos esenciales y posponer el ajuste de cuentas con esa desigualdad que marca la historia. Pudo elevarse el nivel de vida de todos o casi todos, aumentar el empleo formal, ofrecer seguridad social a un número creciente de familias y reducir progresivamente la pobreza.

Fueron los años dorados del capitalismo mexicano, que no por azar coincidieron con la era de oro del capitalismo internacional, como la nombró el historiador Británico Eric Hobsbawn. Se pudo hacer convivir crecimiento alto y sostenido con una desigualdad que apenas cambiaba. Las distancias entre los más pobres y los más ricos se acortaron pero nunca permitieron afirmar que se tratara de una tendencia firme.

Una lectura detallada y en profundidad del 68 pudiera informarnos, por ejemplo, que aparte del mal trato y la corrosión del Estado post revolucionario que se hizo patente con Díaz Ordaz y su fiebre represiva, en las mentalidades juveniles que descubrían abruptamente la sociedad y la política estaba presente ya la percepción intuitiva de que la injusticia frente a la que protestaban tenía su origen en otra injusticia, la social, tal vez más arraigada que la que encarnaba entonces en jueces, policías y mazmorras.

Así la vivieron probablemente muchos de los dirigentes estudiantiles que por antecedentes o por súbita aculturación tomaron contacto con una concentración de poder y riqueza que poco o nada tenía que ver con el discurso justiciero que todavía acompañaba en aquellos años el rito del poder y su reproducción. Lo que apareció de repente ante sus ojos no fue el ascenso indudable de los sectores medios urbanos que ellos reflejaban, sino la distancia existente entre su situación y perspectivas y la riqueza concentrada en una minoría de la que abiertamente formaban parte los dirigentes del Estado.

El reclamo del 68, sin embargo, no fue económico o social sino de congruencia política y jurídica, pero no fue en balde que el siguiente presidente de la República, Luis Echeverría, pusiera en el centro de sus convocatorias iniciales la lacra de la desigualdad y la necesidad de dar lugar a otra forma de crecimiento, "el desarrollo compartido". Se buscaba así poner el tema de la desigualdad en un elevado lugar en el orden de las prioridades de un Estado cuya legitimidad histórica emanada de la Revolución resentía el brutal mentís que le impusieron los estudiantes desde su lectura elemental del código democrático.

Pronto, la fortaleza del privilegio mostraría su vigor y renuencia a todo tipo de cambio y la reforma fiscal caería hecha pedazos en las escalinatas de los Pinos, mientras el presidente y su gobierno se olvidaban de la distribución del ingreso y se aprestaban a crecer a cualquier costo con tal de dinamizar unas contradicciones sociales que emergían sin pedir permiso a nadie. Cuando lo obtenían de un presidente que buscaba en la movilización algún punto de

apoyo, estos contingentes no tardaban en preguntar y preguntarse por los rumbos de una justicia social que soslayaba la fuente principal de sus limitaciones: la desigualdad.

La desigualdad y sus paradojas: inventario de desafíos.

Las aventuras y desventuras del Estado post revolucionario en sus tratos con la desigualdad son conocidas, pero aún son tierra ignota cuando se busca establecer relaciones robustas entre ella y los modos, usos y abusos del poder político. Menos sabemos de lo que este fenómeno implica para condicionar o definir la conducta de las elites económicas y culturales, y prácticamente nada de lo que propicia en aquellos mexicanos urbanos, jóvenes y desamparados, que hoy cubren el panorama nacional.

De cómo leen, entienden y asimilan el escenario abusivo de concentración de riqueza estos mexicanos sólo tenemos las expresiones más violentas o, en el extremo opuesto, anómicas. En ambos casos, estas reacciones aparentemente han tendido a disolverse en la salida al exterior o la cada vez más intensa migración interna entre ciudades y territorios sin nombre, que recogen a estos ejércitos de jóvenes sin expectativas reales, salvo las que les ofrece el consumo inmediato, fruto de la piratería o el contrabando, que además se financia en medida creciente con los mendrugos de la informalidad laboral o de plano el crimen organizado.

De la desigualdad emanan muchos desafíos para la vida en sociedad y para el funcionamiento eficaz de un orden democrático como el que México ha buscado por décadas. En esto, como lo ha mostrado el estudio del PNUD sobre la democracia y el desarrollo, somos tan latinoamericanos como siempre: nos une la gana de ser modernos, pero nos divide hasta los bordes de la escisión una desigualdad profunda que se ha arraigado en estos años de cambio globalizador. Con la globalización además, las brechas entre las regiones mexicanas históricas se han acentuado y no suena ya fantástico o apocalíptico advertir que de la escisión secular que acosa desde los orígenes al Estado nacional y ahora al proyecto de Estado democrático de derecho, podemos deslizarnos a la secesión que hoy proyectan con valor y dolor los millones de migrantes a Estados Unidos. Y su contraparte alojada en los ricos empresarios y rentistas cuyas empresas se empobrecen -y los impelen a no tener más horizonte que Houston.

Las fuentes de toda esta panoplia de amenazas que retan el discurso democrático y modernizador de los últimos tiempos son varias pero siempre encontraremos en ellas a la desigualdad económica y social que articula visiones, disputas, rencores colectivos y decepciones individuales. Superar este laberinto supone una formidable toma de conciencia de la sociedad y de sus elites de la magnitud del desafío y de la pertinencia histórica que tiene encararlo, no solo por razones de ética y congruencia política sino porque sin hacerlo no será factible vivir la globalización como formación nacional. Así de escueto puede ser el panorama de opciones que determina una desigualdad que hoy podemos apreciar como fenómeno transversal y ubicuo que se expresa en la salud, la educación o la cultura.

Tomar conciencia puede significar muchas cosas. Pero para traducirse en compromiso social tiene que derivar en una reconfiguración del Estado que para ser nacional en medio del cambio del mundo tiene que ser también Estado

social. Solo de ese modo se puede aspirar a que además sea efectivamente Estado democrático de derecho.

Una nota sobre el Estado necesario

El Estado necesario para esta etapa de nuestra evolución histórica tiene que ser capaz de combinar este triángulo de adjetivos (social, democrático, de derecho) y dar lugar a una secuencia de políticas que sean compatibles con un crecimiento económico rápido y sostenido además de financieramente sustentable. De este modo, lo que está en cuestión es una forma de acumulación de capital que de entrada impone serias y severas posposiciones del consumo en un momento en el que lo que sobresa es la indisposición colectiva a imaginar y construir un futuro por medio de la inversión productiva. Este es un dilema mayor emanado de la desigualdad que afecta a cualquier agenda de política económica y social que quiera inscribirse en un proyecto de rehabilitación estatal en clave democrática.

La desigualdad, la pobreza de masas y la concentración del privilegio de que nos hablan las cifras presentadas aquí, se dan cita en medio de una sociedad eminentemente plebeya cuyo gobierno y conducción quiere hacerse ahora por vías plurales y representativas. En esta perspectiva, es forzoso admitir que la desigualdad, la pobreza y la concentración son vectores insoslayables de la composición del poder constituido democráticamente, así como de la configuración de los poderes de hecho que han emergido con el cambio económico y político de los últimos lustros.

Esta combinación de privilegio, inequidad y vulnerabilidad de grandes grupos con la emergencia de poderes no constitucionales, que sin incurrir en la ilegalidad criminal sí se conducen como fuerzas que por ellas mismas pretenden modular al conjunto de la vida pública y del Estado, se alimenta de y alimenta la, cultura de la satisfacción que ha surgido en estas décadas de cambio social desbocado, cambio económico segmentado y cuasi dictadura estabilizadora.

Un Estado como el que el país requiere para sortear las tormentas globales y encauzar las pugnas distributivas domésticas que se avecinan, tendrá que forjarse al calor de una dialéctica turbulenta entre la lucha por el poder y la lucha por la redistribución social. Podemos imaginar todavía un cauce productivo para esta convulsión que parece inevitable, a partir de un discurso que dé sentido histórico a un proyecto de desarrollo que ofrezca bases racionales a la urgencia de recuperar el crecimiento rápido de la economía como un requisito primordial para dar materialidad y credibilidad a propósitos de equidad y construcción de ciudadanía.

Democracia, desarrollo y equidad frente a los desafíos de la desigualdad.

Termina este trabajo con un punteo telegráfico de elementos pertinentes para la construcción de una economía política dirigida a encarar y superar la desigualdad imperante. Se trata sólo de eso, pero puede contribuir al diseño y la expansión de una agenda que hoy aparece pasmada.

La explicación de la desigualdad no puede prescindir de sus raíces históricas: concentración de la riqueza y de la propiedad y en el tiempo acaparamiento de activos reproductivos y de los medios para adquirirlos y acrecerlos; Y, junto con esto, discriminación, racismo y elites siempre en punto de fuga. Sin embargo, la historia trae siempre consigo cambios de perspectiva y deslizamientos

materiales y en las relaciones sociales, en la demografía y la ocupación del territorio que es indispensable inscribir en una economía política como la que se requiere para el cometido anotado. Hay que asumir una demografía política en acelerada mutación y una geoeconomía y una geopolítica que igualmente cambian con celeridad al compás del cambio del mundo y de las propias estructuras nacionales.

Con el cambio estructural se prometía un cambio parametral de fondo: la apertura externa, la competencia ampliada y la reducción de los núcleos más poderosos del rentismo asentados en el Estado, ampliarían las oportunidades de acceso al capital y a las actividades de alta productividad. Se ampliaría el alcance a los bienes de consumo modernos y gracias a la generalización e internacionalización de la racionalidad instrumental gobernada por el mercado, crecería el empleo no calificado que es el más abundante.

De esta manera, el crecimiento sostenido crearía condiciones de mercado para modificar la distribución funcional del ingreso mediante la expansión del empleo. La sociedad abierta con democracia, a su vez, abriría la puerta a políticas de equidad desprendidas del corporativismo y la manipulación y el control inmediatistas.

No ocurrió así y pocos esperan hoy que por una vía única de mercado abierto y democracia representativa se vaya a modificar la pauta de concentración dominante, reducir la pobreza de masas sostenidamente y superar el “trialismo” estructural en que ha desembocado la globalización mexicana. Entre 2000 y 2005, periodo de estreno de la democracia con alternancia en la presidencia de la República y afirmación de la pluralidad en el Congreso y la Federación (gobiernos divididos y federalismo “salvaje”), se registró también una destrucción neta de empleos formales mientras el empleo agropecuario se reducía en dos millones de personas. Consecuentemente, a la expansión de la democracia la acompañó una expansión del empleo informal y de la migración al Norte.

El trabajo es la fuente principal del ingreso en las sociedades modernas. La volatilidad que lo aqueja en los últimos veinte años articula los enormes cambios sufridos por el mundo laboral. Lo que priva hoy es la inseguridad y, sobre todo en los jóvenes, la pérdida de expectativas. En los no tan jóvenes priva el escepticismo, el desaliento y el cinismo. La matriz axiológica heredada del desarrollo anterior pero también inspirada por más de un siglo de ambición y construcción republicana, es puesta bajo una extrema tensión. En el centro aparece inmovible la desigualdad en todos los órdenes y el deterioro acentuado de los mecanismos e instituciones que en el pasado atenuaban sus efectos materiales, económicos y simbólicos.

¿Cuáles son los desafíos más cercanos, actuales y previsibles, de la desigualdad?

1.- No puede haber poderío exportador sin un mercado interno robusto. Y no hay mercado interno amplio y dinámico sin cambios en la estructura distributiva en favor de la equidad y sin un crecimiento alto y sostenido del producto y el empleo. Con el crecimiento se abate la pobreza y puede aminorarse el peso de la desigualdad, pero ésta persiste y aqueja a pobres y no pobres y las distancias dentro de los pobres puede verse aumentada en ausencia de políticas expresamente destinadas a fortalecer y aumentar las capacidades de los pobres para defender su ingreso, ejercer su libertad y fortalecer sus

destrezas y visiones para actuar en el mundo de la política, donde se procesan algunos de los aspectos institucionales fundamentales para lograr que los frutos del progreso técnico se distribuyan equitativamente.

2.- La democracia resiente la desigualdad, porque ésta pone en entredicho su discurso sustantivo que es igualitario en forma y fondo. Al volverse “mal público” y combinarse con la pobreza de masas, la desigualdad propicia una doble escisión y alienación: de las masas respecto de los grupos dirigentes y de estos respecto de la nación en su conjunto. Tiende a predominar en la conducta social la “salida” sobre la “voz”, y la “lealtad” para recordar a Hirschman) se deteriora hasta desembocar en la antipolítica, la celebración cínica del crimen organizado y la emergencia de múltiples y superpuestas formas de puja distributiva que bloquean cualquier salida productiva que busque no ser de suma cero. Como es claro, la reforma del Estado en dirección de la equidad, la “tercera reforma” dirigida a incrustar lo económico en lo social y lo político en lo ético, es puesta en suspenso.

3.- Seguramente, en la economía y sus nuevas configuraciones transnacionales (apertura, libre movilidad de capitales, predominio de la IED en los sectores dinámicos y el sistema financiero, etc.), puede detectarse aún la operación de las fuerzas poderosas clásicas de la desigualdad. Predomina la concentración de capacidades y capital en la gran empresa y el empequeñecimiento y dispersión de la pequeña y mediana les restan fuerza para insertarse dinámicamente en los mercados y ampliar su participación en el ingreso (Ver Cuadro Anexo III). La informalización masiva del trabajo, a su vez, debilita la organización del trabajo formal lo que resulta en un régimen generalizado de salarios medios estancados y bajos. Sólo los altos ejecutivos y funcionarios públicos, junto con un reducido número de profesionistas, técnicos y administradores, registran aumentos significativos en sus emolumentos. Así, la escisión de las elites se vuelve tendencia dominante y conforma un piso duro de la mala distribución.

Sin competencia efectiva; sin protección amplia dirigida a fortalecer la seguridad social básica; sin acceso al crédito ni a los sectores dinámicos de la exportación para el grueso de las PYMES, la trialización económica se consume y determina la segmentación desigual del espacio, el ingreso y el progreso técnico.

5.- Así vista, la desigualdad desafía directamente al mercado realmente existente que se pone a su servicio y reproducción. De aquí la necesidad de una reforma institucional que profundice y amplíe la competencia y contribuya a recrear los mecanismos estatales de mediación del conflicto social y de producción sistemática de instrumentos de seguridad colectiva universal. Sin esto, no hay mercado que pueda soportar una dinamización de la desigualdad con crecimiento, mucho menos una redistribución como la prometida por el discurso neo liberal del cambio estructural.

Desde la perspectiva del trabajo, sin embargo, el primer paso obligado es la recuperación del ritmo de creación de empleos, lo que no podrá lograrse si se mantienen e imponen como tasas “históricas” las observadas en los ‘últimos veinte años. Para avanzar en la actualización institucional congruente con el nuevo “modelo” de economía abierta y de mercado, es indispensable empezar por las políticas que dinamicen el mercado a través de la inversión. Será con el crecimiento en marcha cuando las instituciones “necesarias” se hagan visibles y pueda procederse pragmáticamente a su instalación. No antes.

6.- En el pasado se habló con insistencia de las fallas del Estado que obligaban a su reforma: sobredimensión de su aparato productivo; rentismo y corrupción; eficiencia sometida a la dictadura del juego y el capricho político de corto plazo, etc. Hoy tenemos que poner en el centro de ese inventario de fallas, en realidad por encima de ellas, a la incapacidad del Estado para generar visiones de futuro y de conjunto, así como para articular intereses encontrados y forjar una voluntad común o realmente mayoritaria y validable democráticamente para recuperar el desarrollo como proyecto histórico. Sólo así, el Estado estará en condiciones de actuar por fuera del mercado para corregir sus fallas más aparentes y nocivas para el crecimiento y la equidad.

7.- El Estado no se ha mostrado sensible a las señales del mundo desigual. En la práctica se impone la visión de sus elites más atrincheradas en la defensa del privilegio ganado previamente, y es por eso que la estabilidad financiera de la macro economía se vuelve dogma y verdad inconmovible y única. Es por esto también, que en los hechos se entiende como tarea de Estado la contención del crecimiento en aras de una estabilidad estancadora y al final de cuentas desestabilizadora de la dinámica económica real. Sin superar esta grieta política y conceptual, no pueden concebirse ni diseñarse las políticas de largo plazo que reclama la agenda del desarrollo en la globalización. Mucho menos podrá actuarse frente al desafío de las mil caras de la desigualdad.

8.- De aquí la pertinencia de una tercera reforma que emane del reconocimiento intenso de la sociedad desigual que es México. Más que en la economía política, donde hay que hurgar es en la matriz de valores que articula las prácticas de la política del poder y las creencias de la economía. Tan a largo plazo como se quiera y pueda, es en un cambio progresivo de algunos de los valores básicos que han producido esta sociedad y esta economía altamente insensibles a la desigualdad, donde podrá encontrarse el hilo para salir del laberinto en que la persistencia de la desigualdad ha metido al México globalizado.

De esta reforma, que en otra parte he bautizado como una reforma intelectual y moral orientada a hacer del Estado un verdadero Estado social, pueden surgir nuevas formas de articulación y cohesión sociales, estímulos positivos sobre las otras reformas implantadas (la económica y la política) y el descubrimiento de nuevos vectores para reforzar o remendar la integración nacional: en lo político- democrático y en lo regional.

9.- Entendida como pivote de una nueva ronda reformadora, esta reforma social del Estado puede inducir la invención y la construcción de los eslabones perdidos del cambio estructural que son indispensables para “nacionalizar” la globalización y hacer que trabaje efectivamente a favor del crecimiento económico de México. Al poner en el centro lo social, se reivindica el papel estratégico del mercado interno, del empleo y del crecimiento económico. Lo ético y lo político podrían darse la mano con lo económico, cuya transformación fue presentada como un sustituto eficiente de los valores públicos, de la concertación política y de los sentimientos morales de la sociedad.

10.- Una convocatoria para “socializar” el Estado como vía para su renovación y para darle sustrato institucional al compromiso de la sociedad con la igualdad, puede llevar al encuentro racional de los eslabones faltantes de la cadena democratizadora, en especial aquel que nos refiere a un compromiso congruente de las elites con la búsqueda de la equidad. Este compromiso

tendría que concretarse pronto en una reforma fiscal redistributiva y en la innovación institucional correspondiente.

10.- No hay globalización exitosa ni democracia madura, sin la existencia y reproducción de capacidades nacionales de adaptación del progreso técnico universal. Sin creatividad e innovación productiva vinculadas a la educación superior y la investigación científica. Tampoco habrá democracia consolidada y profunda, definida por la aceptación y el apoyo de la ciudadanía, en una sociedad cuarteada, agresiva y permanentemente amenazada, no tanto por la rebelión de sus masas (el populismo de todos tan temido) sino por la de sus elites y su renuncia a volverse grupos dirigentes.

San Pedro Mártir D.F. 23/11/05

Cuadro Anexo I
Algunos Municipios colindantes de alto contraste en
niveles de desarrollo

Municipios Colindantes	IDH	Indice de Salud	Indice de Educación	Indice de Ingreso
Puebla				
Teopatlán	0.6080	0.6650	0.5832	0.5757
San Diego de la Mesa	0.6241	0.6990	0.6518	0.5215
Oaxaca				
Coicoyan de las Flores	0.3952	0.5269	0.2929	0.3656
Santiago Juchitán	0.6386	0.7358	0.6366	0.5434
Michoacán				
Tzitzio	0.6173	0.6554	0.6768	0.5196
Mirelia	0.8256	0.8522	0.8547	0.7700
Nayarit				
Del Nayar	0.4917	0.5433	0.5395	0.3924
Tepic	0.8378	0.8583	0.8673	0.7879
Guerrero				
Coahuayutla	0.6020	0.6541	0.6523	0.4997
José Azueta	0.7921	0.8362	0.7925	0.7477

Fuente: Informe de Desarrollo Humano México, 2004. PNUD.

16

**Percepción ciudadana sobre la desigualdad legal, y la justicia
distributiva**
Anexo II

País	Siempre o casi siempre logra hacer valer sus derechos ¹				Cuán justa es la distribución del Ingreso
	Mujer	Indígena	Pobre	Inmigrante	Valor promedio ²
Argentina	69.7	9.1	7.9	21.4	1.40
Bolivia	54.8	21.2	13.9	38.5	1.92
Brasil	78.3	34.3	20.1	47.6	1.82
Chile	68.9	33.5	19.9	27.2	1.81
Colombia	70.3	22.1	18.1	24.1	1.70
Costa Rica	59.8	23.2	13.7	21.3	2.10
Ecuador	60.4	40.2	25.2	30.6	1.77
El Salvador	72	32.3	32.4	30.9	2.00
Guatemala	65.3	38.7	24.8	18.7	1.80
Honduras	69.8	34.6	23.5	25.1	2.01
México	54.8	7.5	5.6	9.9	1.63
Nicaragua	60.3	23.5	17.7	25.1	2.00
Panamá	65.6	10.5	10.7	21	1.63
Paraguay	71.5	15	10.9	54.1	1.68
Perú	61.9	16	11.6	55.4	1.89
República Dominicana	76.4	11.5	22.2	40.2	1.98
Uruguay	78.4	17.1	21.8	39.3	1.79
Venezuela	73.7	28.2	26.1	30.3	2.06
Centroamérica y México	66.4	22.2	18.9	23.3	1.88
Región Andina	63.8	27.8	19.2	36.2	1.87
Mercosur y Chile	71.2	19.2	14.6	36.2	1.70
América Latina	67	23.1	17.8	30.8	1.82

¹ Se incluyen las respuestas dadas a las alternativas "Siempre" y "Casi Siempre", del total de ciudadanos encuestados.

² Este indicador representa un valor promedio a cada una de las respuestas dadas a la pregunta ¿Cuán justa cree que es la distribución del Ingreso en su país?, contando con 4 opciones, "muy injusta", "injusta", "justa" y "muy justa", y asignado en orden

Fuente: Informe sobre la Democracia en América Latina, PNUD, 2004; p. 106 y Anexo Estadístico, p.

**CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES ECONOMICAS POR SECTORE DE ACTIVIDAD
Y ESTRATOS DE PERSONAL OCUPADO 2003**

Anexo III (Continúa)

ESTRATOS DE PERSONAL OCUPADO POR SECTOR	UNIDADES ECONOMICAS	% del Total Nacional	% del Sector	PERSONAL OCUPADO TOTAL	% del Total Nacional	% del Sector	TOTAL DE REMUNERACIONES	% del Total Nacional
TOTAL NACIONAL	3005157			16,239,536			838,643,615	
0 a 5 personas	2699400	89.8%		5,089,925	31.3%		44,536,716	5.3%
6 a 10 personas	153891	5.1%		1,135,040	7.0%		34,212,360	4.1%
11 a 20 personas	71962	2.4%		1,038,152	6.4%		41,336,059	4.9%
21 a 50 personas	46123	1.5%		1,440,812	8.9%		68,442,712	8.2%
51 a 100 personas	16142	0.5%		1,138,960	7.0%		64,154,363	7.6%
101 a 250 personas	10931	0.4%		1,689,346	10.4%		108,295,918	12.9%
251 a 500 personas	4043	0.1%		1,385,897	8.5%		100,307,837	12.0%
500 y más personas	2665	0.1%		3,321,404	20.5%		377,357,650	45.0%
SECTOR 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	328718	10.9%		4,198,579	25.9%		292,768,582	34.9%
0 a 5 personas	274,222	9.1%	83.4%	581,613	3.6%	13.9%	6,322,376	0.8%
6 a 10 personas	24,456	0.8%	7.4%	180,490	1.1%	4.3%	5,186,869	0.6%
11 a 20 personas	11,400	0.4%	3.5%	164,911	1.0%	3.9%	6,712,535	0.8%
21 a 50 personas	8,354	0.3%	2.5%	266,857	1.6%	6.4%	13,983,466	1.7%
51 a 100 personas	3,856	0.1%	1.2%	276,998	1.7%	6.6%	17,369,220	2.1%
101 a 250 personas	3,379	0.1%	1.0%	533,097	3.3%	12.7%	38,949,199	4.6%
251 a 500 personas	1,627	0.1%	0.5%	571,804	3.5%	13.6%	46,784,965	5.6%
500 y más personas	1,424	0.0%	0.4%	1,622,809	10.0%	38.7%	157,459,952	18.8%
SECTOR 46 COMERCIO AL POR MENOR	1493590	49.7%		4,035,223	24.8%		76,748,284	9.2%
0 a 5 personas	1,420,560	47.3%	95.1%	2,539,248	15.6%	62.9%	15,514,570	1.8%
6 a 10 personas	44,368	1.5%	3.0%	319,974	2.0%	7.9%	9,186,244	1.1%
11 a 20 personas	16,241	0.5%	1.1%	231,501	1.4%	5.7%	9,303,400	1.1%
21 a 50 personas	7,929	0.3%	0.5%	240,796	1.5%	6.0%	10,484,341	1.3%
51 a 100 personas	2,057	0.1%	0.1%	144,979	0.9%	3.6%	6,639,916	0.8%
101 a 250 personas	1,656	0.1%	0.1%	262,617	1.6%	6.5%	11,593,438	1.4%
251 a 500 personas	663	0.0%	0.0%	214,726	1.3%	5.3%	9,677,215	1.2%
500 y más personas	116	0.0%	0.0%	81,382	0.5%	2.0%	4,349,160	0.5%

**CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES ECONOMICAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y
ESTRATOS DE PERSONAL OCUPADO 2003**

Anexo III

(Conclusión)

ESTRATOS DE PERSONAL OCUPADO POR SECTOR	PRODUCCION BRUTA TOTAL	% del Total Nacional	CONSUMO INTERMEDIO	% del Total Nacional	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	% del Total Nacional	TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	% del Total Nacional
TOTAL NACIONAL	6,308,268,632.00		3,099,888,773		268,682,221		3,631,690,273	
0 a 5 personas	524,247,228	8.3%	185,191,227	6.0%	13,306,098	5.0%	326,038,871	9.0%
6 a 10 personas	208,512,911	3.3%	82,979,757	2.7%	4,646,026	1.7%	109,765,122	3.0%
11 a 20 personas	254,197,847	4.0%	113,615,610	3.7%	8,559,251	3.2%	112,059,585	3.1%
21 a 50 personas	449,126,453	7.1%	226,267,549	7.3%	14,028,459	5.2%	215,718,413	5.9%
51 a 100 personas	405,525,752	6.4%	217,900,711	7.0%	12,503,435	4.7%	181,626,676	5.0%
101 a 250 personas	688,343,514	10.9%	375,324,989	12.1%	20,966,045	7.8%	343,609,577	9.5%
251 a 500 personas	727,958,333	11.5%	396,911,969	12.8%	19,272,997	7.2%	355,591,604	9.8%
500 y más personas	3,050,356,594	48.4%	1,501,696,961	48.4%	175,399,910	65.3%	1,987,280,425	54.7%
SECTOR 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	2,732,718,051	43.3%	1,804,730,796	58.2%	68,684,184	25.6%	1,258,435,455	34.7%
0 a 5 personas	62,114,151	1.0%	38,203,203	1.2%	1,538,792	2.2%	32,310,910	0.9%
6 a 10 personas	30,267,912	0.5%	18,029,274	0.6%	578,074	0.2%	13,703,150	0.4%
11 a 20 personas	48,222,534	0.8%	31,268,354	1.0%	1,292,380	0.5%	17,455,835	0.5%
21 a 50 personas	106,551,296	1.7%	72,708,919	2.3%	3,020,236	1.1%	41,158,320	1.1%
51 a 100 personas	139,504,826	2.2%	98,027,180	3.2%	3,162,919	1.2%	63,321,298	1.7%
101 a 250 personas	334,692,256	5.3%	221,303,827	7.1%	8,115,202	3.0%	163,998,694	4.5%
251 a 500 personas	459,917,857	7.3%	288,095,230	9.3%	13,033,306	4.9%	210,202,573	5.8%
500 y más personas	1,551,447,219	24.6%	1,037,094,809	33.5%	37,943,275	14.1%	716,284,675	19.7%
SECTOR 46 COMERCIO AL POR MENOR	454,592,067	7.2%	135,944,379	4.4%	13,711,491	5.1%	225,353,578	6.2%
0 a 5 personas	153,400,447	2.4%	35,167,391	1.1%	3,513,821	1.3%	93,758,091	2.6%
6 a 10 personas	54,165,738	0.9%	13,429,206	0.4%	694,737	0.3%	18,667,797	0.5%
11 a 20 personas	51,036,753	0.8%	14,210,195	0.5%	2,141,386	0.8%	17,675,016	0.5%
21 a 50 personas	52,739,075	0.8%	16,035,285	0.5%	1,897,926	0.7%	19,583,243	0.5%
51 a 100 personas	33,189,499	0.5%	11,018,622	0.4%	967,479	0.4%	12,751,027	0.4%
101 a 250 personas	56,182,169	0.9%	22,287,716	0.7%	1,865,736	0.7%	31,784,962	0.9%
251 a 500 personas	39,352,671	0.6%	14,805,828	0.5%	1,887,248	0.7%	21,121,718	0.6%
500 y más personas	14,525,715	0.2%	8,990,136	0.3%	743,158	0.3%	10,011,724	0.3%

Fuente: Censos Económicos 2004, Inegi. Publicación en Línea www.inegi.gob.mx

**GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE
EDAD DE 1977 A 2003**

Anexo IV

ENTIDAD	1977	1984	1989	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2003	Niños menores de 5 años con peso insuficiente (%) 2000		Valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2001
Aguascalientes	4.97	5.43	6.48	6.94	7.17	7.41	7.66	7.91	8.20	8.30	4.60		0.837
Baja California	6.07	6.18	7.30	7.67	7.80	7.92	8.05	8.18	8.30	8.40	2.76		0.848
Baja California Sur	5.76	6.05	7.13	7.56	7.76	7.97	8.18	8.40	8.60	8.70	2.85		0.841
Campeche	4.73	4.74	5.61	6.06	6.33	6.62	6.92	7.23	7.60	7.70	5.85		0.826
Coahuila	5.67	5.98	7.04	7.50	7.73	7.97	8.21	8.46	8.70	8.90	11.51		0.714
Colima	4.90	5.53	6.42	6.82	7.03	7.24	7.46	7.69	7.90	8.00	5.87		0.838
Chiapas	2.87	3.06	3.95	4.40	4.66	4.94	5.24	5.55	5.90	6.10	4.04		0.836
Chihuahua	5.27	5.59	6.58	6.99	7.19	7.39	7.60	7.81	8.00	8.10	4.89		0.820
Distrito Federal	7.29	7.63	8.56	8.93	9.11	9.28	9.47	9.65	9.80	9.90	4.48		0.897
Durango	4.68	4.99	6.01	6.45	6.66	6.88	7.11	7.35	7.60	7.70	5.60		0.804
Guanajuato	3.70	3.95	4.97	5.43	5.67	5.92	6.17	6.44	6.70	6.90	24.73		0.802
Guerrero	3.44	3.65	4.77	5.27	5.51	5.77	6.04	6.32	6.60	6.80	6.47		0.773
Hidalgo	3.80	4.12	5.21	5.68	5.92	6.16	6.42	6.68	7.00	7.10	18.36		0.739
Jalisco	5.02	5.23	6.28	6.72	6.93	7.15	7.38	7.62	7.90	8.00	7.19		0.762
México	5.51	5.73	6.83	7.27	7.48	7.70	7.92	8.15	8.40	8.50	3.79		0.817
Michoacán	3.72	4.06	5.00	5.43	5.64	5.87	6.11	6.35	6.60	6.70	3.42		0.756
Morelos	5.20	5.39	6.53	6.97	7.16	7.35	7.55	7.76	8.00	8.10	4.65		0.808
Nayarit	4.36	5.03	5.91	6.32	6.55	6.78	7.03	7.28	7.50	7.70	4.58		0.781
Nuevo León	6.44	6.71	7.74	8.15	8.34	8.53	8.73	8.93	9.10	9.20	4.44		0.858
Oaxaca	3.05	3.35	4.27	4.72	4.97	5.24	5.52	5.81	6.10	6.30	11.66		0.722
Puebla	4.10	4.41	5.42	5.87	6.10	6.34	6.59	6.85	7.10	7.30	6.76		0.774
Querétaro	3.87	4.61	5.78	6.36	6.68	7.01	7.37	7.74	8.10	8.30	5.65		0.815
Quintana Roo	4.75	4.89	6.07	6.63	6.93	7.25	7.58	7.92	8.30	8.50	8.06		0.838
San Luis Potosí	4.02	4.40	5.51	5.99	6.23	6.48	6.73	7.00	7.30	7.40	7.76		0.777
Sinaloa	4.92	5.27	6.42	6.86	7.04	7.23	7.43	7.63	7.80	7.90	4.20		0.793
Sonora	5.61	5.99	7.10	7.51	7.68	7.86	8.04	8.22	8.40	8.50	3.71		0.833
Tabasco	4.14	4.62	5.66	6.13	6.38	6.63	6.90	7.17	7.50	7.60	3.95		0.783
Tamaulipas	5.42	5.71	6.78	7.22	7.44	7.66	7.89	8.12	8.40	8.50	9.42		0.823
Tlaxcala	4.71	4.97	6.20	6.70	6.94	7.18	7.44	7.70	8.00	8.10	6.57		0.778
Veracruz	4.16	4.28	5.24	5.66	5.87	6.09	6.32	6.55	6.80	6.90	8.28		0.754
Yucatán	4.57	4.50	5.52	5.96	6.17	6.40	6.63	6.87	7.10	7.20	10.74		0.788
Zacatecas	3.68	4.37	5.21	5.61	5.83	6.06	6.29	6.54	6.80	6.90	5.77		0.769
REPÚBLICA MEXICANA	4.99	5.26	6.24	6.66	6.87	7.09	7.31	7.56	7.80	7.90	7.25		0.808

Nota: Los datos para los años anteriores a 1980, y posteriores a 2000, son estimados por la DGPPP, SEP.

Fuente: Sistema de información estadística de la Secretaría de Educación Pública. www.sep.gob.mx